

La guerra de baja intensidad y la militarización de Centroamérica*

*José Rodolfo Castro Orellana
Déborah Barry*

I. La nueva visión contrainsurgente estadounidense; la guerra de baja intensidad (GBI)

Sin pretender agotar el tema, mencionamos en primer lugar que una de las lecciones militares más significativas derivadas del enfrentamiento en Indochina fue que el empleo masivo de una capacidad militar superior contra un adversario compuesto por fuerzas irregulares y populares, no constituye una garantía de victoria. Lanzar una guerra convencional contra fuerzas guerrilleras significaba enfrentar un tipo de lucha con formas inapropiadas, que en última instancia resultaban hasta contraproducentes.

En el transcurso de la misma guerra de Indochina se dieron intentos por aplicar planes y programas contrainsurgentes en Vietnam del Sur (en dos etapas: 1961-1963 y luego desde 1969 hasta 1975). Los estudios recientes demuestran que sendos intentos fueron relegados a segundo plano, en vista de haberse aplicado paralelamente con esquemas de guerra convencional que desembocaron en la escala masiva de las fuerzas estadounidenses. Por su papel secundario, dichos programas contrainsurgentes llegaron a ser conocidos como "la otra guerra".

*Ponencia presentada en el VII Congreso Centroamericano de Sociología. Tegucigalpa, Honduras, del 2 al 7 de noviembre de 1986. Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Otra conclusión a la que arribaron las fuerzas armadas de Estados Unidos se refiere al carácter fundamentalmente político de este tipo de lucha, es decir: lo que hay de por medio no puede combatirse solamente en el plano militar. Era indispensable, entonces, un replanteamiento estratégico. En otras palabras, era necesario reevaluar la doctrina de la contrainsurgencia, perfeccionarla y, sobre todo, elevarla a un nivel de importancia estratégica. Mantenerla doctrinariamente como secundaria (*as a doctrinal sideshow*) hubiera equivalido a cancelar la propia naturaleza de la guerra y correr el riesgo de volver a cometer los mismos errores.

Este viraje representó un serio reto para una institución armada como la de Estados Unidos, cuyo *modus operandi* se forjó con base en la concepción y práctica de dos guerras convencionales. Agréguese a ello que al final de la guerra de Vietnam, las pocas estructuras que alcanzaron a profesionalizarse en las actividades contrainsurgentes habían sufrido casi un colapso institucional.¹

Con la reaparición de "los conflictos" en el Tercer Mundo y de acuerdo con una lectura casualística de los mismos, se crean las condiciones para el resurgimiento de los estudios y propuestas de política militar que se habían gestado a la sombra de Vietnam. Existe hoy una coincidencia estrecha entre lo que proponen los ideólogos para la política global, y lo que sugiere el pensamiento doctrinario militar, para enfrentar los "conflictos de baja intensidad".

Este último término que se ha empleado con mucha frecuencia en la literatura y en los debates y políticas recientes relativos al Tercer Mundo, tiende a provocar confusiones cuando es analizado desde la perspectiva de los países a los que se refiere. Aunque sea británico en su origen, el término de "conflicto de baja intensidad" es empleado por los estadounidenses a partir, según su perspectiva, del espectro de conflictos que un poder

imperial podría enfrentar en el mundo de finales del siglo XX. La gama posible abarca, para los Estados Unidos, por el lado de la alta intensidad, una guerra nuclear global; y en el otro extremo del espectro, desde la *desobediencia civil hasta la confrontación armada entre fuerzas gubernamentales locales y movimientos de liberación*, todos considerados de baja intensidad.

La "intensidad" mide entonces el empleo relativo de armamentos, capacidad de juego, tiempo y despliegue de tropas; o sea, es una mensura de factores meramente militares.

El término, sin embargo, es poco útil para describir la naturaleza de una guerra política; en primer lugar, por el hecho de medir en función de distintos grados de despliegue militar, lo cual puede conducir a la conclusión errónea de que es simplemente una guerra convencional en menor escala; y en segundo porque, como hemos mencionado, desde la perspectiva de los países destinatarios, su aplicación no resulta ser una guerra de "baja" intensidad, por los efectos internos que ocasiona.

Existe una gran variedad de definiciones para caracterizar los conflictos de baja intensidad. Esto dificulta la precisión conceptual para lo que debiera ser una doctrina moderna de guerra, capaz de desarrollar los elementos designados como centrales para ella: la contrainsurgencia, la "proinsurgencia" (esfuerzos contrarrevolucionarios) y el antiterrorismo y, últimamente, el "narcoterrorismo".

El cuerpo de pensamiento doctrinario de la GBI se elabora a partir de la interpretación sociopolítica de la "desobediencia civil", la "insurgencia" y el "movimiento popular" o "revolución". El aspecto político-ideológico es al que se le ha asignado una mayor importancia, como se verá más adelante. En el caso de este tipo de guerra, la esencia de la propuesta (en términos técnicos-metodológicos) es la de usar contra ellos las mismas tácticas de los movimientos de liberación, y así garantizar una

política que opere en los mismos planos donde tiene influencia el movimiento en el nivel local, nacional e internacional.

La confianza en una posible victoria para las fuerzas contrainsurgentes y contrarrevolucionarias se basa en que el gobierno de Estados Unidos cuenta con muchos más medios y recursos para revertir la lógica de este tipo de guerra contra sus propios autores.

Con base en lecciones propias y ajenas se acepta que "es posible que el enemigo emplee una combinación de medidas políticas, económicas, psicológicas y militares; entonces, el gobierno tendrá que hacer lo mismo para derrotarlo".² La doctrina emergente propone ampliar sustancialmente el campo de acción limitado tradicionalmente a las instituciones militares, pero insiste en que debe ser el aspecto político el que oriente todo el conjunto.

El objetivo principal no se alcanzará, como en las guerras convencionales, con el énfasis puesto en la eliminación física del enemigo —movimientos de liberación o gobiernos revolucionarios—, sino mediante la deslegitimación, el socavamiento y aislamiento de dicho enemigo, hasta el grado en que deje de ser considerado como una alternativa política posible o estable.

Esto se traduce, en el nivel práctico, en que la población civil se convierte en el objetivo estratégico de la guerra; no pretende eliminarla, sino neutralizar su lealtad a la guerrilla o a cualquier fuerza revolucionaria. En el mejor de los casos, ganarla para el proyecto contrainsurgente o contrarrevolucionario, según corresponda. El nuevo quehacer militar se amplía, pues se le incorporan tareas que influyen sobre la población fuera de lo tradicionalmente militar, mientras se exige una mayor politización de la misma actividad militar. La propuesta de este tipo de "guerra total en el nivel de la base" (*total war at the grass roots level*) implica la

participación de instituciones no militares en la guerra contrainsurgente.

Además de representar esto un problema que tendrá repercusiones todavía incalculables, por significar un cambio en la naturaleza intrínseca del soldado (tanto el estadounidense como el local), implica que todas las instituciones militares y no militares que participarán en este esfuerzo deben hacerlo de manera altamente coordinada. Ésta ha sido otra de las lecciones de la experiencia de Vietnam.³ Un requerimiento previo a la efectividad de la coordinación es que toda institución tenga una comprensión conceptual compartida sobre este tipo de guerra, y luego un nivel de coordinación constante y permanente.

Enfrentar seriamente los conflictos de "baja intensidad" refleja, para algunos, lo profundo que puede ser el reto para todo el sistema de política exterior estadounidense. Esto se expresa en problemas complejos, con muchos niveles y dimensiones a manejar simultáneamente, y sobre todo que su "trato" no puede ser de corto plazo.

De esta manera, la GBI comienza a dominar la formulación de toda la política hacia la región considerada conflictiva. La respuesta tiene que ser totalizante, integral y abarcar cada uno de los aspectos de la vida que puedan influir en la percepción del futuro de la población involucrada.

Frente al reconocimiento de que el cambio es necesario, incluso inevitable, una línea del pensamiento militar sobre la GBI declara que la "iniciativa estará con aquellos que logren influir o explotar el proceso de cambio". Dicho de otra manera por distintos autores, frente a la tendencia exitosa de los movimientos de liberación nacional, lo que hay que lograr es "un cambio de actitud" en la población de los países locales, acompañado por el mismo proceso en la opinión internacional.

Se trata entonces de lograr una nueva versión de las reformas para bloquear o disputar banderas a las revoluciones: disputar a las fuerzas revolucionarias su base social de apoyo, lo cual implica promover reformas con un tipo de represión que no la enajene. Surge entonces la necesidad de instrumentar la forma de represión.

Esencial para la GBI es pasar de la *represión masiva* —que no logra una distinción entre guerrilla y población civil (entre cuadro político de un gobierno revolucionario y un ciudadano)—, a la *represión selectiva*. Esta regla de la guerra debería ser aplicada en todo el ámbito nacional del conflicto, no sólo en las llamadas "zonas de guerra". El grado de éxito del cambio hacia lo selectivo está directamente relacionado con la profesionalización de las fuerzas armadas y policiales y la mejora en la inteligencia sobre el enemigo.

La GBI propone la utilización de medios tecnológicos más complejos para incrementar la capacidad técnica de la inteligencia en todos los niveles.

Esto significa, en el interior de cada país, la organización y entrenamiento de las fuerzas de seguridad local; y en el nivel de región, como en el caso de Centroamérica, la integración de la inteligencia regional.⁴

Es particularmente en estas áreas donde se presenta una suerte de división del trabajo entre las fuerzas locales y las fuerzas de Estados Unidos. De hecho, la propuesta significa la incorporación del sistema de seguridad de los países en conflicto, vía la tecnificación y el control de la inteligencia, dentro del sistema de seguridad estadounidense.

El otro componente central de la inteligencia es el aspecto político-cultural a incorporar en las fuerzas estadounidenses. Aquí radica la clave para el avance de las nuevas modalidades de la GBI. Por la misma naturaleza política de la guerra, es una modalidad altamente diná-

mica donde es necesario realizar constantes readecuaciones de programas de acción militar. Lograr percibir los "cambios" de actitud o el "grado de lealtad en una población", medir el "éxito" de una operación psicológica significa para los estadounidenses (en este caso las Fuerzas Especiales), lograr un dominio del idioma y un conocimiento más profundo de la cultura de los países en conflicto para poder mejorar su integración en el medio e inmiscuirse en el conflicto.

No es casual que el Ministro de Defensa de Estados Unidos, Caspar Weinberger, pidiera un mayor entrenamiento lingüístico y cultural para las Fuerzas Especiales en un discurso pronunciado en una conferencia sobre los conflictos de baja intensidad (enero, 1986).⁵

El enfoque del accionar político-militar de la guerra de baja intensidad demuestra un sesgo psicológico, el cual se refleja en un nivel teórico cuando el pensamiento en boga señala que "[en estos conflictos] no existe la noción de una victoria por la fuerza de las armas. La victoria, en estos contextos, debe ser medida en cuanto se evitan ciertos resultados (indeseables), o por cambios de actitud en el grupo objetivo".⁶ He allí el objetivo específico respecto de la población civil.

La modalidad principal de la GBI dirigida a las fuerzas revolucionarias en sí, sea guerrillera o gobierno, es de *guerra de desgaste* o *guerra de agotamiento*. De nuevo, el intento de utilizar las tácticas insurgentes contra ellos implica que los enfrentamientos tendrán por objetivo agotar la capacidad operativa y funcional de estas fuerzas en todas las áreas donde haya logrado éxito.

Factor común a cualquier guerra: el desgaste, en la GBI se diferencia por ser determinado políticamente. La búsqueda del desgaste físico, psicológico, moral y material estará siempre en función de deslegitimar, socavar

y aislar a las fuerzas revolucionarias de su base de apoyo; esto se alcanza, en conjunto, con el trabajo político-psicológico con las masas, su eventual debilitamiento y colapso, aparentemente desde dentro.

Traducido esto a todos los planos de la guerra, el desgaste cobra formas distintas en cada uno de ellos; desgaste diplomático para neutralizar la solidaridad internacional y aislar a las fuerzas revolucionarias; desgaste militar al mantener en movimiento constante a la guerrilla o en estado de alerta continua al ejército revolucionario; desgaste económico como consecuencia de lo mismo, etcétera.

El redimensionamiento de la guerra implica su necesaria prolongación. Se vislumbran nuevas etapas difíciles de determinar. Hay algunos factores que pueden contribuir a una lectura del desarrollo de la guerra en su nueva modalidad: al no buscar la eliminación física del enemigo (el abandono de la idea de una victoria rápida), las fuerzas contrarrevolucionarias intentarán penetrar y debilitar primero sus retaguardias, las cuales son definidas también en términos políticos, no sólo militares.

Otro factor es la medición del avance en el montaje de la infraestructura para el sistema de seguridad regional que, en el caso de Centroamérica, implica cambios en el rol del Comando Sur,⁷ su rearticulación con las bases militares norteamericanas en territorio estadounidense, el entrenamiento, equipamiento y fogueo de las Fuerzas Especiales y la CIA para la expansión de sus funciones dentro de la región.⁸ El tercer factor, quizás el más importante para mantener la opción de GBI vigente, es la readecuación conceptual y operativa de las Fuerzas Armadas y policiales locales, con el fin de hacerlas corresponder a su nuevo papel. En la jerga de la GBI es lo que se llama la "preparación total del área en conflicto".



II. Efectos de la política contrainsurgente en la región centroamericana

En las líneas siguientes nos referiremos a los efectos que este tipo de estrategia ha inducido en Centroamérica. Primero, analizaremos la readecuación de los ejércitos de la región a ella y sus efectos sobre las instituciones militares; abordaremos como caso tipo, por su claro desarrollo en dependencia de la asesoría estadounidense, el de El Salvador. Luego veremos cómo el ejército sandinista se desarrolla con base en una doctrina político-militar popular, que es en esencia la antítesis de la concepción de los ejércitos de la región, pero que sirve a los Estados Unidos como laboratorio experimental para probar la eficacia de su estrategia basada en una fuerza apendicular (la contra).

En segundo lugar, tocaremos el tema de la militarización de la sociedad civil como consecuencia de la puesta en práctica de la guerra de baja intensidad en las políticas económicas, en la adopción de formas restringidas de democracia y en los costos sociales que ocasiona este fenómeno, para finalizar con un conjunto de conclusiones hipotéticas, que nos servirán de guía en la profundización de nuestras investigaciones posteriores.

Readecuación de los ejércitos de la región a las necesidades de la GBI

En primer lugar, la GBI exige una readecuación estructural y funcional de los viejos ejércitos oligárquicos o prooligárquicos de la región formados en la visión clásica de guerra convencional para ponerlos a tono con la aplicación de tácticas de guerra irregular.

Aun cuando *históricamente* los mecanismos militares de estos países nacen y se desarrollan en corres-

pondencia con los intereses de las oligarquías, formalmente fueron erigidos en garantes de la soberanía nacional. La naturaleza oligárquica de estos ejércitos sufrió *modificaciones en su forma*, aunque su *contenido* de clase se ha mantenido inalterado durante los últimos 50 años, hasta antes de la escalada militar estadounidense del último lustro.

Estas modificaciones en los ejércitos procedieron en no pocas ocasiones de fuerzas internas de los institutos armados que buscaban su modernización y su profesionalización, para cumplir realmente con el papel institucional. Sin embargo, su dependencia económica de la oligarquía ha constituido una atadura tan fuerte, que aun los sectores "constitucionalistas" o "institucionalistas" internos a la fuerza armada no han logrado romper este ligamen.

La coexistencia de sectores fuertemente conservadores y prooligárquicos y sectores "institucionalistas" y hasta progresistas en el seno de las fuerzas armadas, fue lo que posibilitó la permanencia de los ideales nacionalistas en el seno del ejército, hasta la llegada de la militarización pronorteamericana influida por su DSN en la variante de "guerra de baja intensidad".

En este sentido postulamos que la conversión de estos ejércitos en fuerzas contrainsurgentes, que libran una lucha antisubversiva inspirada en la Doctrina de Seguridad Nacional Norteamericana, tiende a romper en forma paulatina, pero muy contradictoria, no solamente su tradicional dependencia de las oligarquías criollas, sino también tiende a romper con la permanencia en su seno de sectores "institucionalistas" y nacionalistas.

La conversión gradual de los ejércitos en eficientes fuerzas contrainsurgentes y la creación de ejércitos revolucionarios en la región —los cuales dependen no sólo económicamente sino también son dirigidos por militares estadounidenses— plantea un cambio drástico

en la naturaleza de estos mecanismos militares: su conversión en apéndices militares de las fuerzas armadas estadounidenses, o en aparatos extensivos de ellas, demostrando así la profundidad y extensión de esta intervención y sus tendencias desnacionalizantes y antipopulares.

Por otra parte, en el marco de la "seguridad nacional" las fuerzas armadas se vuelven "ejércitos subsidiados por Estados Unidos, lo que impone a ellos un ritmo de crecimiento imposible de soportar con el presupuesto nacional".

La hipertrofia de los aparatos militares exige un presupuesto cada vez mayor y el incremento acelerado del apoyo económico para la "seguridad" estadounidense en la medida en que el conflicto regional se prolonga, lo cual conspira contra todos los esfuerzos que se hacen en el campo de la reactivación económica y de los programas de desarrollo social.⁷ Esto último es válido para el caso de Nicaragua, país que ve postergados los beneficios sociales del proyecto popular sandinista por tener que dedicar prioritariamente sus recursos a la "movilización militar" de su población para librar una guerra de defensa de la revolución (destinado cerca del 50% del presupuesto a la defensa).

Además, el hecho de que los ejércitos sean "subsidiados" le permite a los estadounidenses acceder a su conducción directa, ya sea mediante maniobras militares, como en Honduras, o directamente en la guerra, como en El Salvador. Esto tiene implicaciones claras en el manejo de la política interna; es decir que, como ya apuntamos, la dirección de los aparatos militares introduce a los estadounidenses a participar e influir en forma directa en la política nacional; de esa manera se distorsiona aun más el sistema político, que tiende a militarizarse y a desnacionalizarse más rápidamente.

La intención de Estados Unidos de fortalecer las relaciones directas de dependencia entre las instituciones armadas de ese mismo país y sus homólogos centroamericanos, constituye en el fondo una nueva modalidad de intervención político-militar en Centroamérica, en tanto el país norteamericano tiene acceso a las máximas decisiones en lo que respecta a la actividad de fuerzas especiales, en el perfeccionamiento de fuerzas policiales de contrainsurgencia urbana y especialmente en la coordinación de los aparatos de inteligencia político-militar en el nivel regional.²⁰

Pero a la vez se da una dimensión nueva en esta intervención directa, la cual se expresa en la tendencia a abrir "teatros de guerra" novísimos en donde los "soldados" son civiles, algunos altamente capacitados en el manejo de las técnicas de cómputo (recolección de información preparando bases de datos relacionales, que son archivos de computadora que sirven para vincular organizaciones sociales, sindicales, etc., con personas o líderes populares, con fines contrainsurgentes, es decir, para "neutralizarlos"). Otros sectores especializados en técnicas de "guerra psicológica" también se ubicarían aquí: todo el personal capacitado para dirigir "aldeas modelo" o programas de contrainsurgencia enmascarados como "ayuda humanitaria". Esta nueva dimensión de la guerra tiende a opacar la división entre lo militar y lo civil, por lo cual se entraría en una concepción de "guerra total" en donde se tiende, como en la visión orwelliana, a la militarización de toda la vida civil con consecuencias impredecibles en una guerra prolongada.

Veamos un poco detenidamente los cambios que se suceden en los casos de El Salvador y Nicaragua, tratando de establecer elementos de comparación en dos procesos que en esencia son diferentes, pero que tratan de homogenizarse por la perspectiva estadounidense.

El Salvador

El caso de El Salvador es particularmente ilustrativo en la forma y efecto de los cambios de las respectivas fuerzas en relación con el desarrollo de la guerra.

Después de la primera demostración efectiva de fuerzas del FMLN, en la ofensiva general de enero de 1981, el ejército salvadoreño, empleando sus grandes unidades regulares, emprende una campaña tendiente a la aniquilación masiva de su adversario. Para ello moviliza todas sus fuerzas y medios. Confía en que el esfuerzo inicial ha debilitado profundamente a la guerrilla.

La falta de dinamismo del ejército estatal para enfrentar situaciones tácticas cambiantes y su ineficacia para mantenerse ocupando territorios fuera de sus bases determina que su campaña, además de causarles un gran desgaste material y humano, constituya un serio revés para los planificadores y conductores.

Queda de manifiesto la insuficiencia tanto de la ayuda militar como de la presencia estadounidense, pero sobre todo la inadecuación del ejército para enfrentar una guerra irregular.

Es en este periodo cuando se crean los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata, y se aumenta el adiestramiento de las tácticas de contrainsurgencia, con la adquisición del correspondiente equipamiento técnico.

Desde mediados de 1982 hasta finales de 1983, la seguridad que gana la guerrilla para sus desplazamientos por gran parte del territorio le permite poner en práctica la táctica de la concentración de sus fuerzas. Orgánicamente, el FMLN constituye brigadas y batallones, lo que le permite efectuar acciones de envergadura, como la toma del Cuartel de la IV Brigada de Infantería en el Paraíso, Chalatenango, en diciembre de 1983.

Frente a este avance fundamentalmente cualitativo, el alto mando militar debe tomar la decisión de

efectuar una suerte de repliegue que le permita tomar tiempo para reestructurar profundamente su esquema orgánico y operativo, y evitar así el desmoronamiento de todo el aparato.¹¹

Con base fundamentalmente en los resultados adversos de la guerra y en el gran número de bajas que soporta el ejército, la asesoría estadounidense impone finalmente su concepto de "tropas sin cuartel". Se crean y transforman unidades destinadas al despliegue permanente en el terreno, con alto grado de movilidad y con un diseño netamente ofensivo.

Estas tropas, eminentemente irregulares, carecen sin embargo de las condiciones esenciales para el tipo de guerra que deben enfrentar. En primer lugar no tienen arraigo en las masas de las zonas donde operan, lo que las hace dependientes de las estructuras logísticas regulares, y se limita así su movilidad y autonomía. Desconocen el terreno y simplemente la oficialidad no puede adaptarse a una forma operativa desconocida en la que el enemigo les lleva una gran ventaja.

Con persistencia, la presión estadounidense va venciendo la resistencia de los oficiales salvadoreños a renunciar a las tácticas convencionales de la guerra regular. Coincidentes con la visión estratégica norteamericana de seguridad, la correspondencia técnica de contrainsurgencia va imponiéndose a la jefatura salvadoreña, lo que permite profundizar la "desregularización" de las fuerzas armadas.¹²

Aumentan al doble las brigadas de infantería, y se crean tropas cazadoras que se distribuyen territorialmente en un despliegue ofensivo. Junto con ello, se refuerzan las unidades helitransportadas, se crean las Patrullas de Reconocimiento de Largo Alcance, los Batallones antiterroristas, los Batallones Pirañas de la Marina, los Batallones de Reacción Inmediata, etcétera.

Los esfuerzos del ejército, sin embargo, no muestran progresos significativos en el terreno de los hechos. El FMLN continúa sus acciones, ajustando sus campañas tanto a las ofensivas gubernamentales como a las coyunturas político-económicas.

Consecuentes con esta forma de guerra y sus resultados, el ejército debe incorporar un elemento extraño a su idiosincrasia: esta lucha les obliga a disputar la adhesión política de las masas a su accionar.

La incorporación del trabajo político al esquema militar (guerra psicológica) determina en los aparatos militares una hibridación antifuncional que en última instancia deviene una guerra contra la población. El nivel de la guerra (masividad e intensidad) se eleva, mediante la incorporación, por parte del ejército, de "operativos de limpieza" con la aviación y artillería en vastas zonas pobladas.

Es la lógica militar enfrentada al fenómeno del apoyo de las masas a las fuerzas insurgentes.

Frente a este escalamiento, el FMLN debe reajustar su accionar y estructura orgánica, esta vez partiendo de la existencia de unidades mayores. Se procede a la desconcentración de las fuerzas para, en una táctica altamente dinámica, recurrir a la concentración sólo en función de operaciones específicas. El esfuerzo del ejército por probar la eficacia de su nueva configuración se ve frustrado, toda vez que a pesar de la mayor capacidad de respuesta que ha desarrollado, no logra trabar combates con unidades concentradas de la guerrilla. La complejización de su aparato de información y análisis, por su estructura y función, no logra romper el ritmo "regular".

Eufemísticamente, los especialistas del Pentágono describen la situación como "empate". Este solo hecho, de ser así, demuestra la dificultad de competir en un





terreno tan complejo como es la lucha irregular con adaptaciones de un ejército regular. La falla es de fondo; se requiere mucho más que aviones, armas e información para enfrentar a un movimiento guerrillero fuertemente arraigado en su medio social.¹³

La modalidad de la guerra, en última instancia, es impuesta por las fuerzas insurgentes. Es un enfrentamiento político que ha alcanzado el nivel del enfrentamiento militar. Sus conductores son políticos que se han visto obligados a hacer la guerra, sin descuidar su esencia.

Al contraste evidente que presenta el ejército estatal con la situación descrita, se suma que también su capacidad de crecimiento cuantitativo y su capacidad de asimilación de tecnología más avanzada (crecimiento cualitativo) tiene un techo,¹⁴ cuya tolerancia mínima está dada por la saturación. Ello implica que el espacio de maniobras estadounidenses *vis-a-vis* el ejército salvadoreño se reduce sensiblemente. He aquí una regla esencial

a la GBI: "No escalar la guerra ni demasiado rápidamente ni en forma desproporcionada", de lo contrario, la estrategia tiende a desnaturalizarse.

Nicaragua

El ejército de Nicaragua, el más joven de la región, ha tenido, a partir del triunfo de la revolución, dos cambios fundamentales: Su creación, que implicó la transformación de fuerzas y columnas guerrilleras en un ejército regular; y posteriormente, con el trascurso de la guerra de agresión, la readecuación de su organización y doctrina para enfrentar la guerra irregular con la contrarrevolución.

Influyó también la percepción que se tuvo desde los inicios sobre lo que sería el peligro principal: una invasión externa encabezada por Estados Unidos.

Se abordan, en consecuencia, dos tareas principales: la incorporación de las masas a la defensa y la estructuración y resguardo de los órganos permanentes de la defensa, el Ejército Popular Sandinista (EPS) y el Ministerio del Interior. El cumplimiento de estos objetivos se da en un marco económico muy restrictivo, lo que consolida la concepción tocante al desarrollo de fuerzas armadas profesionales pequeñas y eficientes, en torno a las cuales se articularían las distintas formas de participación popular para la defensa.

La guerra es entonces concebida como defensiva y popular; y en sus formas de guerra regular, en las direcciones principales —con pequeñas manifestaciones de formas irregulares de carácter marginal complementario—, es representada como persecución de las bandas contrarrevolucionarias.

El problema principal consiste en transformar a una fuerza guerrillera y miliciano en un ejército nacional

regular, lo cual implica aglutinar bajo un solo mando a las fuerzas existentes, cuya tendencia previa es la dispersión y el caudillismo.

El proceso no está exento de dificultades.¹⁵ Las más evidentes son, por una parte, que la mentalidad y estructura guerrillera se resiste tenazmente a la transformación, pues ésta implica exigencias completamente nuevas, a jefes y soldados, en el terreno de la disciplina, formas y normas de vida, etc; y por otra, la falta de recursos materiales necesarios para el montaje de un ejército regular.

Elemento importante a destacar como característica particular del desarrollo del EPS, que no se repite en ningún otro ejército centroamericano, es la incorporación masiva y voluntaria de la población a las tareas de la defensa, a través de las milicias populares. La concepción de guerra regular que subyace en el proceso hace necesaria una estrecha articulación orgánica entre las fuerzas populares y las regulares.

El esquema sustentado y trazado sobre las hipótesis iniciales comienza a sufrir variaciones en 1982, año en que el país empieza a enfrentar una clase diferente de invasión: El asedio de pequeñas bandas de exguardias cambia cualitativa y cuantitativamente, con el inicio de mayores y más sistemáticas operaciones contrarrevolucionarias.¹⁶

En 1982, y hasta 1983, las fuerzas vivas de la defensa militar se articulan en torno a los Batallones de Infantería de Reserva (BIR), unidad básica militar compuesta por civiles con entrenamiento que prestan servicio por seis meses.

La composición heterogénea de estas unidades de milicianos, su insuficiente experiencia y limitada preparación combativa determinan que se evidencie una desventaja operativa en relación con las fuerzas somocistas, que se presentan al teatro mejor preparadas y equipadas.

Esta situación permite que la iniciativa pase a las fuerzas contrarrevolucionarias infiltradas, que despliegan una acabada táctica de lucha irregular.

En 1983 las operaciones contrarrevolucionarias habían adquirido el carácter de una guerra irregular en gran escala, con un extenso ámbito de operaciones. Este escalamiento sobrepasa las capacidades del pequeño ejército regular y de sus milicias no profesionales. La hipótesis de que las pequeñas bandas contrarrevolucionarias sólo jugaban un papel complementario-marginal en la preparación de una estrategia estadounidense de invasión resulta superada por los acontecimientos.

Esta situación abre paso al segundo gran cambio del ejército nicaragüense: la creación de una gran capacidad ofensiva irregular. Para ello, a mediados de 1983 se crea el Servicio Militar Patriótico, servicio de conscripción obligatoria por dos años.

La medida constituye un salto cualitativo y un paso cuantitativo de carácter indudablemente estratégico, destinado a revertir definitivamente el curso de la guerra. Al primer llamado, efectuado a comienzos de 1984, se enlistan aproximadamente 10 mil jóvenes. Los reclutas son organizados en batallones de choque, irregulares, de alta movilidad y poder de fuego: los Batallones de Lucha Irregular (BLI).¹⁷

La medida permite nutrir al ejército de una masa de combatientes seleccionados, aptos para recibir un completo entrenamiento, y capaces de acumular una rica y útil experiencia combativa. Aunque la medida no está exenta de dificultades ni de costos políticos ni económicos, su impacto es menor que el causado por la movilización de milicianos, de los cuales la mayor parte provenían del sector productivo.

La permanente amenaza de invasión, expresada en las maniobras continuas y masivas en Honduras y el litoral, y en la creciente hostilidad de la administración



estadounidense contra el gobierno sandinista, determina que la conducción superior no descuide la preparación y equipamiento de las unidades regulares del ejército. Sin perjuicio de lo anterior, las unidades convencionales desarrollan capacidades y se tecnifican para sostener la guerra irregular y de la contra.

La concepción de guerra popular —en esta etapa— es reforzada con la creación de milicias territoriales, comunidades de autodefensa, defensa civil, etc., que cumplirían diversas tareas tanto defensivas como ofensivas a lo largo del territorio nicaragüense.¹⁸

Poco a poco se van desarticulando las Fuerzas de Tarea y Comandos Operativos de la contra: a fines de 1984 se percibe una gradual pérdida de la iniciativa, y en el año siguiente acecería lo que se ha definido como su derrota estratégica. Los esfuerzos por levantar su capacidad a través del equipamiento técnico resultaron infructuosos (a pesar de su espectacularidad, como en el

caso de los misiles tierra-aire), pues nunca lograron alcanzar objetivos militares de importancia.

Las ventajas que parecía tener en su favor el Ejército Popular Sandinista residían en una mayor flexibilidad al cambio, por su juventud (personal e institucional), y por tener en su origen cercanas raíces irregulares. También parecería ser ventajosa la posibilidad de contar con el concurso entusiasta de la población para asumir tareas de defensa en los distintos escalones; y finalmente, por la naturaleza del enemigo.

La contra, comprometida en una lucha irregular, no lograría articular una retaguardia local de significación en las zonas de guerra, ni mucho menos contaba con formas de referencia política en las ciudades. Ello originó limitaciones de toda índole, entre otras, la de depender enteramente de la ayuda estadounidense. Asumió más la forma de una fuerza expedicionaria que emplea métodos de lucha irregular, que la de una fuerza guerrillera insurgente.

Militarización de la sociedad civil

Contrainsurgencia y autoritarismo en políticas económicas

Las políticas económicas de los gobiernos de la región estarían enfiladas a la "estabilización y reactivación económica" del aparato productivo de estos países, como un esfuerzo paralelo (pero integral) a la estrategia militar que pretendía la derrota de los movimientos de liberación nacional y el derrocamiento de la Nicaragua sandinista, mediante los planes de "pacificación".

Aun cuando los periodos, ritmos de aplicación y características del plan son diferentes para cada país, en general se pretende el "remozamiento" del modelo de capitalismo dependiente y periférico que históricamente ha atado las economías y los sistemas políticos a la hegemonía regional de Estados Unidos. Sin embargo, dada la crisis que atraviesa el capitalismo periférico en la región, este remozamiento no puede ser postergado sin hacerle reajustes en algunos componentes estructurales.

Esta problemática puede ser abordada en dos niveles que son distintos pero orientados por un mismo objetivo contrainsurgente. En el nivel macro estarían los "paquetes económicos", cuyo propósito es el de estabilizar la lógica de funcionamiento del capitalismo dependiente. En el nivel de microprograma se aplica todo el paquete de ayuda económica que tiene fines directamente *contrainsurgentes* o que está destinada a construir infraestructura con fines político-militares, con el objeto de preparar condiciones para una prolongada presencia estadounidense en la región.

Por una parte está la ayuda aplicada a "planes de desarrollo comunal" o de acción cívica, sean dirigidos por militares, civiles o instituciones privadas humanita-

rias (de la nueva derecha estadounidense); estos planes tienen como objetivo el desarrollo de la contrainsurgencia activa (El Salvador y Guatemala) o preventiva (Honduras, y Costa Rica), para quitar apoyo social a los movimientos populares entre la población rural, tales como los planes CONARA, el Plan Mil y últimamente el plan "Unidos para reconstruir" (El Salvador), de "Aldeas estratégicas" (Guatemala) o la acción cívica en maniobras militares (Honduras, Costa Rica y Panamá) por parte del ejército estadounidense.

Estos planes de desarrollo y de acción cívica, dirigidos por los militares, tienen un triple propósito:

- a) Reponer constantemente los daños causados por la guerrilla a la infraestructura socioeconómica, con lo cual se frena el ritmo de desgaste.
- b) Promover la participación directa de la población civil en estas actividades, para crear una imagen de confianza en el gobierno y fomentar una dependencia logística que permita controlarlos.
- c) Acclimatar a tropas estadounidenses en terreno centroamericano.¹⁹

También se ubican en este rubro la ayuda económica dedicada a la formación de los cuerpos paramilitares denominados en la jerga contrainsurgente "patrullas de autodefensa civil", que representan un mayor grado de militarización de la población civil. De acuerdo con el Informe Miller "...el ejército salvadoreño usa la ayuda humanitaria para fines militares. Por ejemplo: para inducir a los aldeanos a formar patrullas de defensa civil". En Guatemala, la AID provee desde 1984 ayuda principalmente para la contrainsurgencia en el altiplano, por lo cual es fácil deducir que gran parte de ese apoyo se aplica al crecimiento de estos cuerpos paramilitares.²⁰

En la actualidad estos cuerpos irregulares forman verdaderos ejércitos paramilitares en Guatemala y El Salvador, tendencia que se irá imponiendo en Honduras y Costa Rica a medida que se profundice la intervención estadounidense por la presencia de los irregulares de la "contra" y la persistencia de Estados Unidos en imponer los intereses de su "seguridad nacional".

Por otra parte, se destina ingente cantidad de recursos a la construcción o reconstrucción de infraestructura para usos militares. En Honduras, a partir de las ininterrumpidas maniobras militares, se han construido pistas aéreas, carreteras y puentes, bases militares, etc., combinados con acción cívica entre la población empobrecida. En Costa Rica, en la región fronteriza con Nicaragua, se ha impulsado la edificación de obras de infraestructura tales como la ampliación del aeropuerto de "Los Chiles" (capaz de recibir aviones DC-3), la creación del Comando Atlántico de la guardia civil, la construcción de la carretera San José-Guapiles-Siquirres-Limón, y el mejoramiento y pavimentación de las carreteras a Upala, Los Chiles y Puerto Viejo, zona, esta última, de acantonamiento del "Comando del Atlántico".²¹

Además, desde 1984 funciona a 13 km de la frontera con Nicaragua la base militar de "El Murciélagos".

En el nivel macroeconómico se plantean los "programas de estabilización nacional del aparato productivo", los cuales son diseñados e "impuestos" a los gobiernos por organismos financieros internacionales como el FMI, el Banco Mundial y la AID estadounidense.

La propuesta en lo tocante a la transformación y reproducción "estructural" que requieren las economías centroamericanas se refiere a un modelo de *fomento de las exportaciones no tradicionales*, el cual apunta hacia la restauración de "las fuerzas del mercado competitivo" mediante la iniciativa privada, combinada con la visión de un Estado modernizado en función de "la

economía de la oferta" (*supply side economics*) en auge a nivel mundial; es decir que el modelo apunta hacia el mercado externo, más que hacia la ampliación del mercado interno.

La tendencia que induce al proyecto es, por un lado, la creación de un Estado cada vez más divorciado de las necesidades sociales, mediante la "reprivatización" del sector estatizado de la economía. Pero, por otro lado, con ello se provoca el acentuamiento de los rasgos autoritarios del Estado, mediante una mayor centralización de las decisiones estatales; éstas a su vez se ven más influidas por las demandas de los organismos financieros internacionales, que utilizan la crisis de solvencia crónica de los gobiernos centroamericanos para presionarlos a que impongan "paquetes económicos" onerosos a los sectores populares.²²

A este respecto, la oposición popular a los programas económicos impuestos por los organismos financieros internacionales constituye un fenómeno muy importante ya que, en definitiva, se cargan los costos de déficit fiscal del Estado sobre las espaldas de los trabajadores.

Prácticamente en todo Centroamérica el FMI es objeto del repudio popular y de movilizaciones que no pocas veces terminan en el estallido de las masas; así sucedió en Guatemala, en agosto y septiembre de 1985; en Panamá dio lugar a la remoción del Presidente Barletta; en Costa Rica, en 1984, propició una movilización popular sin precedentes; y en El Salvador, Honduras y Guatemala se expresa actualmente un repudio general a las "reformas económicas" orientadas por el FMI; todo lo anterior indica que hay una creciente conciencia en Centroamérica sobre el papel de naturaleza antipopular imperialista de estos organismos, y que un modelo económico basado en la "seguridad" estadounidense puede provocar en el

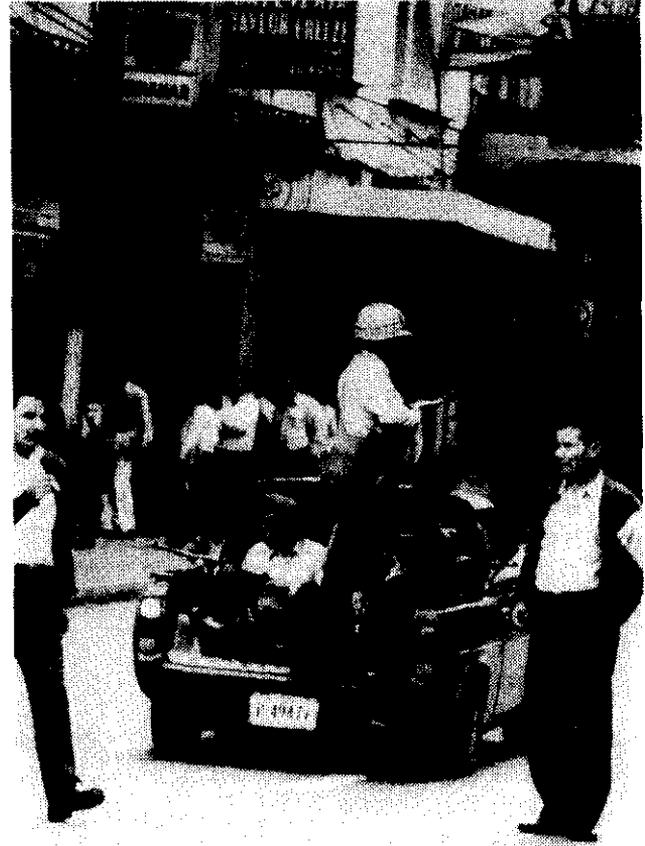
futuro inmediato un estallido social de consecuencias incalculables.

Este proceso de "desnacionalización" del Estado y de la economía en Centroamérica es una tendencia inherente al "modelo de seguridad económica" de Estados Unidos y de los organismos financieros internacionales controlados por este país; por lo tanto, no corresponde esencialmente a las necesidades de los países de la región sino a las exigencias de la DSN estadounidense. Ello nos lleva a postular el modelo como profundamente antinacional y antipopular; y puede preverse que su implantación traerá mayor exacerbación de las ya graves desigualdades que persisten en la región.

Militarización de la política: Las "democracias restringidas"

Como hemos mencionado, uno de los aspectos clave de la política de seguridad estadounidense es el pretendido "reforzamiento del centro democrático" en la región; lo cual no supone terminar con el *poder real* de los militares, sino hacer un juego de apariencias con la *instauración del "poder formal"* de los civiles a través de procesos electorales restringidos y fuertemente controlados, la erradicación del fraude electoral tradicional y con el "alejamiento" de los militares a los cuarteles o su concertación en la guerra, como en El Salvador y Guatemala.

Este esquema —no exento de contradicciones— es el que en general, aunque con variantes internas en cada país, se estaría impulsando en El Salvador, Honduras, y últimamente en Guatemala. Estas "democracias restringidas" no se propician solamente por la necesidad de "lavarle la cara" a las tradicionales dictaduras militares —incondicionales aliadas de los gobiernos estadou-



nidenses— sino particularmente por necesidades contrainsurgentes y/o de apoyo a la contrarrevolución en Centroamérica.

Es decir que, al evaluar las posibilidades de estos gobiernos en la perspectiva de la "democratización", tal y como es concebida por la administración estadounidense es ineludible plantearse la naturaleza de ellos: surgen de procesos electorales limitados y controlados y de pactos

pragmáticos con las fuerzas armadas que son las que realmente sostienen el poder;²³ enfrentan la oposición de las oligarquías o de sectores de ella (por no ser partícipes de los pactos que llevan al "poder formal" a estos gobiernos); y lo que es fundamental, nacen por consentimiento (activo o pasivo) de una decisión estadounidense, todo lo cual los hace muy débiles en lo político y fuertemente dependientes de la estrategia estadounidense con respecto a esa región.

Este hecho del poder real de los militares es reconocido por el actual Presidente guatemalteco, Vinicio Cerezo, quien en una entrevista con Piero Gleijeses del *The New Republic*, previa a las elecciones, afirmó que:

Aunque fuera elegido, la puerta de la democracia apenas se abrirá en Guatemala. Mi gobierno no plantearía reformas sociales porque el ejército se opondría. Sería un gobierno de transición hacia la verdadera democracia... Si yo ganara el voto popular, los militares podrían negarse a reconocer mi triunfo; y si me dejaran tomar el poder, podrían impedirme gobernar.

Recientemente, Cerezo ha reconocido que "el ejército posee actualmente una alta cuota de poder", a raíz de un artículo publicado también en *The New Republic*, que contiene un análisis mediante el cual se demuestra el poder real de los militares.²⁴

Por otra parte, pero en consecuencia con lo anterior, el planteamiento estadounidense trata de oponer estos "procesos de democratización" a un pretendido "totalitarismo sandinista" en Nicaragua, para descalificar esta experiencia de autodeterminación y rescate de la soberanía nacional, y promover internacionalmente a sus "aliados" en Centroamérica. En otras palabras, la administración estadounidense estaría tratando de velar la contradicción histórica entre dependencia-independencia en Centroamérica, pre-

sentándola como una lucha democracia *versus* totalitarismo en la región.

Al simplificar las raíces históricas de la lucha de estos países, mediante el esquema democracia *vs.* totalitarismo, se recurre a intentos por construir artificialmente alianzas políticas (como la Comunidad Democrática Centroamericana, el Foro de San José y últimamente el "Grupo de Tegucigalpa"), con lo cual se procura, entre otras cosas, acercar a Costa Rica a los gobiernos en donde el poder real está en manos de los militares, para dar mayor credibilidad y legitimidad al proyecto contrainsurgente.

La consecuencia para Costa Rica del esquema estadounidense de "construir o preservar la democracia" en Centroamérica —el cual da prioridad a la seguridad de Estados Unidos—, es una creciente militarización de ese país, proceso que va socavando cada vez más las bases de su sistema político democrático-liberal.

Esto se expresa en primer lugar en las tendencias autoritarias que en los últimos años han aflorado en fuerzas políticas asociadas con el Estado costarricense;²⁵ en segundo lugar se manifiesta en la proliferación de los cuerpos paramilitares tanto oficiales como privados (12 grupos paramilitares, de acuerdo con la Coordinadora por la defensa de las Libertades Democráticas en Costa Rica); en tercer lugar en la creación y entrenamiento (por Estados Unidos) de batallones antsubversivos y/o antiterroristas; en cuarto lugar, fundamentalmente en la presencia de ejércitos contrarrevolucionarios de nicaragüenses y mercenarios, los cuales además de quitar de hecho al Estado el monopolio de las armas y de la violencia, prácticamente se constituyen en un verdadero poder alternativo, pero de facto, en las regiones fronterizas con Nicaragua. Esto implica la enajenación de grandes porciones del territorio nacional al Estado Costarricense.²⁶

Esta tendencia se acentuaría si se concretizaran los planes asociados a los recién aprobados 110 Millones de

dólares que pretenden el fortalecimiento del "frente sur" de la contra.

Los costos sociales de la militarización

De acuerdo con datos sobre armamentismo de instituciones pacifistas de Estados Unidos, los efectivos militares regulares en los cinco países de la región sumaban 207 350 en 1985. Esta cifra no incluye a los irregulares de la "contra" y del FMLN, tampoco a los paramilitares ni al personal Militar extranjero en la región. Sumadas las fuerzas irregulares a los ejércitos, fácilmente cuentan 1 millón 500 mil personas sobre las armas en esta parte del planeta.

Si comparamos la cantidad de efectivos regulares de los ejércitos de Centroamérica (207 350), con los ejércitos del Brasil y México (277 100 y 250 000, respectivamente), con poblaciones de 130 y 75 millones, respectivamente, en Centroamérica (con una población cercana a los 25 millones), estos aparatos militares se convierten en una carga improductiva muy pesada para estos países. Es elemental, en consecuencia, que sin ayuda externa, o sin la estrategia de combinar producción y defensa (Nicaragua), sería imposible la existencia de estos enormes mecanismos militares en países con hambre endémica.

Por otra parte, pero íntimamente ligado con lo anterior, tenemos que los presupuestos nacionales de defensa, de El Salvador y Nicaragua absorben alrededor del 50% de sus gastos; Guatemala, un porcentaje que oscila entre 20 y 30%; y los de Honduras y Costa Rica elevan cada año sus gastos en defensa y seguridad. A ellos deberá sumarse la ayuda estadounidense a "países aliados en Centroamérica", que se destina principalmente a financiar, en forma directa o indirecta, el esfuerzo contrainsurgente actual o preventivo.

Otra consecuencia dramática de la guerra y la militarización es la ola de refugiados y desplazados. Este fenómeno social es efecto de la guerra, pero como ya se dijo, también es premisa de la contrainsurgencia "sacar al pez del agua".

En la lógica de la guerra política, "el enemigo" no sólo es la guerrilla, sino toda su base de apoyo humano, especialmente la que vive en zonas en disputa o en control guerrillero. El Presidente de El Salvador (Duar-te) lo dijo claramente —aunque en forma brutal— en conferencia después de una masacre en contra de la población civil:

Hay mucha gente en los campamentos (guerrilleros) y esa gente muere cuando ocurre un ataque militar. La única diferencia entre esa gente y el guerrillero es el rifle en la mano. ¿Quién dice que una señora viejita que muere allí, no tenía un fusil en las manos, momentos antes?

Para el caso de El Salvador, este tipo de política contrainsurgente ha significado que cerca de un 20% de su población sean refugiados y desplazados internos. Si se compara con la experiencia de Vietnam, en donde al final de la guerra el 12.5% de su población llegó a tener ese "estatus", el conflicto salvadoreño, que tiende a prolongarse por la "seguridad estadounidense", tendrá efectos más contrastantes y agudos sobre su población civil.

En Guatemala, entre 1981 y 1983 —periodo en el que el ejército gubernamental utiliza en gran escala los métodos contrainsurgentes (tierra arrasada, patrullas civiles y aldeas modelo)— se pueden contabilizar más de 35 mil muertos, 900 mil personas agrupadas en la autodefensa civil, 18 mil habitantes concentrados en aldeas modelo (dato oficial), 46 mil refugiados en México y 1 millón 200 mil desplazados internos. Son datos más que elocuentes de los efectos de la "lógica" con-

trainsurgente sobre la población de este país, que se convierten en un costo social para ésta y las próximas generaciones.

Para Nicaragua, los efectos de la "lógica guerrerista" de la administración Reagan son dramáticos. Según datos recopilados por nuestro equipo, hasta el primer semestre de 1986 sumaban 29 185 las víctimas de la "guerra", entre muertos, heridos, secuestrados y capturados de la población civil y combatiente. En esa cifra están incluidos más de 4 mil niños y adolescentes, hecho que demuestra el carácter que cobra este tipo de "guerra de baja intensidad".

El fenómeno de los desplazados de guerra es también de envergadura. En primer lugar la emigración inorgánica del campo a la ciudad ha provocado un catastrófico aumento poblacional en la capital (de 500 mil en 1979 a más de un millón de habitantes en la actualidad), lo cual crea una presión insostenible sobre los ya limitados servicios urbanos. Por otra parte, las exigencias político-militares han impulsado al gobierno a desplazar tierra adentro a cientos de familias campesinas e indígenas de sus lugares de origen, lo cual ha provocado no pocas dificultades sociopolíticas y económicas para el gobierno sandinista, el cual hace esfuerzos desde 1982 por reasentar 50 mil familias (300 mil personas) en una lógica que combina la defensa con la producción.³³

En definitiva, vemos que los efectos de la militarización se reflejan en un contraste dramático para los países de la región y de consecuencias impredecibles para el futuro: mientras el gobierno estadounidense suministra la tecnología, la logística y la dirección militar en la "guerra de baja intensidad", los pueblos centroamericanos son los que cargan con los altos costos sociales de la "lógica de seguridad nacional norteamericana".

III. Conclusiones

1. En primer lugar, postulamos que el proceso de estructuración de una política más o menos coherente hacia Centroamérica ha transitado por varias fases. Ello supone que en 1981 no existía en la administración Reagan un enfoque muy complejo sobre el "conflicto centroamericano" y que, en general, se pasa de una fase en donde no hay homogeneidad en la política hacia Centroamérica, hacia una etapa en la cual se desarrolla en forma muy contradictoria una visión sobre los conflictos regionales basada fundamentalmente en la "estrategia" de guerra de baja intensidad.

2. En segundo término, se desarrolla un tipo de guerra en donde en forma creciente se va dando más importancia a los instrumentos político-ideológicos y diplomáticos que a los propiamente militares. Lo anterior no implica el abandono del empleo de la presión y ofensiva militar; en algunos casos incluso aumenta: Se trata de obtener con ello resultados políticos.

3. Como tercer punto, asistimos a un conflicto con tendencia hacia el alargamiento, pero en donde las fuerzas revolucionarias logran la capacidad de mantener la movilización interna e internacional alrededor de la necesidad de cambios profundos en el *statu quo*. Sin embargo, esta prolongación del conflicto, aunque también desarrolla en niveles complejos los instrumentos militares de los contendientes, conspira en contra de la voluntad y capacidad de cambio, que es el elemento movilizador de las fuerzas populares.

4. Un cuarto aspecto es el desarrollo de una concepción contrainsurgente y contrarrevolucionaria, que trata de incorporar a su actividad los métodos y tácticas de los revolucionarios (acervo revolucionario) en contra de los mismos revolucionarios, con éxitos muy limitados hasta el momento. En el fondo se trata de una

ausencia de *alternativa* de cambios profundos, que incorpore contenidos de carácter popular.

5. Un elemento predominante de este enfoque de los conflictos regionales y en la estrategia de baja intensidad es su desprecio por los mecanismos de negociación y por el orden jurídico internacional sostenido desde la segunda posguerra. Se trata de una suerte de privilegio del "interés nacional" estadounidense a costa del relegamiento de la negociación internacional a un nivel de obstáculo. Su manifestación más contundente es el desprecio por el principio de autodeterminación de las naciones, por considerar más importante la "defensa" de las "fronteras ideológicas".

6. Que el caso de Centroamérica (especialmente Nicaragua y El Salvador) se ha convertido en la punta de lanza de la "doctrina Reagan", lo cual ha generado claras contradicciones:

Por un lado, la adopción de la estrategia de GBI exige la prolongación del conflicto para la obtención de resultados (desgaste del enemigo). Por otro, a medida que se acerca el final de la administración, crecen las presiones para que se alcance una solución. El dilema entonces será: abandonar la GBI y negociar... o escalar la guerra por el único camino posible: la intervención.

7. Los indicios mencionados sobre las tendencias de la militarización, tanto del Estado como de las sociedades civiles de Centroamérica, interpretados desde la óptica del pensamiento contrainsurgente moderno (GBI), sugieren que no existe todavía una clara concepción sobre lo que puede ser una victoria para los intereses estadounidenses. Hasta ahora una lectura podría ir en el sentido de que la definición sigue siendo determinada por su adversario, esto es, impedir al enemigo, en sus propios términos, que triunfe.

Notas

- 1 Para mayor información sobre este tema ver: Col. John D. Waghelsteind, "Post-Vietnam Counter insurgency Doctrine", en *Military Review* (mayo 1985); Frank R. Barnett, Hugh B. Tovar y Richard H. Shultz (editores), *Special Operations in US Strategy* National Defense, Washington, D.C., 1983.
- 2 Frank Kitson, *Low Intensity Operations: Subversion Insurgency, Peace-Keeping*, Harrisburg, England, 1971.
- 3 Richard A. Hunt y Richard Shultz, Jr. (editores), *Lesson from an Unconventional War: Reassessing U.S. Strategies for Future Conflicts*, New York, 1983, Introducción, y Sam C. Sarkesian, "Organizational Strategy and Low intensity conflicts", en *Special Operations in U.S. Strategy*, Washington, D.C., 1985, págs. 261-289.
- 4 Esto incluye vuelos espías para detectar movimiento de tropas, guerrilla, líneas de abastecimiento, población desplazada, etc..., mejoramiento de equipo de comunicación para las fuerzas contrainsurgentes y contrarrevolucionarias, e instrumentos complejos para el rastreo de información electrónica. También significa la incorporación de las entidades de inmigración y aduana de los países regionales para el control de movimiento de personas determinadas dentro de la región. Ver: "Memorandum del Departamento de Estado al Asesor de Seguridad Nacional Robert MacFarlane sobre Financiamiento del Entrenamiento Policial en Centroamérica", Washington, D.C., junio 1985, págs. 4-8; Joanne Omang, "The Winds of War Blow Through Washington", en *Washington Post Weekly Edition*, 28 julio 1986, pág. 2; y capitán Ricardo Weelock Román, "Preparaciones de la Intervención", en *Barricada*, 18 julio 1986.
- 5 Discurso del Ministro de Defensa Caspar Weinberger en la Conferencia La Guerra de Baja Intensidad, Fort McNair, 13-14 de enero, 1986.
- 6 Robert Kupperman Associates, "low-intensity Conflict", pág. 4.
- 7 Raúl Leis, *Comando Sur Poder Hostil*, CEASPA, Panamá, 1985 y "SWORD (Southern Command's Small Wars Operations Research Directorate) Puts Cutting Edge on US SOUTH COMMISSION", en *Southern Command News*, julio 1986, págs. 25-71.
- 8 Ver: Alfonso Chardy, "Debate Grows in Washington on Management of Contra War", en *New York Times*, 31 julio 1986, donde describe el futuro papel de la CIA en Nicaragua como "operational control, battle strategy and tactics, communications, logistics, intelligence and Combat advise". Ver también: Richard Halloran, "C.I.A. is reported Set to Channel Aid to Contras", en *New York Times*.
- 9 A este respecto dice el "Informe al Comité de Control de Armas y Política Exterior sobre la ayuda norteamericana a El Salvador"

- (en adelante se citará como el "Informe Miller") de los Congresistas Miller, Leach y Hatfield: "Mientras nuestra ayuda directamente relacionada con la guerra llega a la cantidad de más de \$50 mil dólares por cada rebelde salvadoreño, nuestra ayuda para la Reforma y el Desarrollo sólo llega a \$300US dólares por cada salvadoreño que vive en la pobreza", Washington, D.C., febrero 1985, pág. 28.
- 10 Numerosos viajeros que entran, por ejemplo, a Costa Rica, vía aérea no sólo con procedencia de Nicaragua, son objeto de interrogatorios, por Agentes de la "Seguridad Nacional", y es de tal naturaleza la información manejada para tales interrogatorios, que es fácil colegir que existe una coordinación entre las policías políticas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, y que por sí solos no podrían manejarla sin el concurso y apoyo de la CIA. Esto se confirma con la aparición del "Programa antiterrorista regional"; ver detalles del programa en "Memorandum del Departamento de Estado al Asesor de Seguridad Nacional Roberto McFarlane sobre Financiamiento del Entrenamiento Policial en Centroamérica", Washington, D. C., junio 1985, págs. 4-8.
 - 11 Ver nuestro trabajo: "El Plan de Contrainsurgencia Norteamericano para El Salvador y los cambios en las Fuerzas Armadas", en *Centroamericana: La Guerra de Baja Intensidad*, Cuadernos de Pensamiento Propio, CRIES, Managua, febrero 1986.
 - 12 Ver lo confirmado por el coronel J. Waghelstein en su conferencia, "Conflictos de Baja Intensidad en el Periodo Post-Vietnam", en el *American Enterprise Institute*, Washington, D.C., 16 enero 1985.
 - 13 A este respecto ver el revelador artículo del dirigente guerrillero Joaquín Villalobos comandante del FMLN, "El Estado Actual de la Guerra y sus Perspectivas", en *Revista Estudios Centroamericanos*, El Salvador, abril 1986, pág. 183.
 - 14 Por ejemplo, la extensión del territorio y el carácter de la guerra son un límite al empleo de técnica aérea compleja, de armas de artillería pesada e incluso de técnicas de detección electrónica aérea demasiado compleja, cuya aplicación se complica por el grado de aproximación de las fuerzas en conflicto.
 - 15 Comandante de la Revolución, Humberto Ortega. "El Pueblo en Armas Garantiza la Victoria", conferencia del 7 de febrero de 1985, publicación de la Dirección Política EPS.
 - 16 Philip Brenner y William LeoGrande, "Congress and the Notso-Secret War Against Nicaragua: a preliminary analysis", Washington, D.C., 1985, pág. 4.
 - 17 Comandante Joaquín Cuadra, ViceMinistro de Defensa, eps, conferencia de Prensa, 14 octubre 1985.
 - 18 Comandante Roberto Calderón, EPS. Entrevista con Agencia Nueva Nicaragua, septiembre 1985.
 - 19 Estos aspectos han sido ampliamente analizados en los trabajos del proyecto de "Militarización" de la CRIES, en *Centroamérica: La Guerra de Baja Intensidad*.
 - 20 Ver trabajo de Deb Preusch y otros, "Ayuda Externa de EEUU hacia Centroamérica", en *Albuquerque Resource Center*, New Mexico, 16 mayo 1985, págs. 14-18.
 - 21 Equipo Costa Rica del Proyecto *Conflictos y Alternativas de Paz en la Región Centroamericana*, "La Contrarrevolución en Costa Rica", San José, noviembre 1985, págs. 9-11.
 - 22 Ver a este respecto *Envto*, No. 55-56, IHCA, Nicaragua, enero-febrero 1986, pág. 47.
 - 23 Estos pactos son bastante débiles porque se asientan sobre alianzas forzadas por Estados Unidos. Por ejemplo: el pacto de Duarte con los militares en El Salvador, se asienta sobre la base de que Duarte garantiza la entrada de "ayuda" estadounidense para ganar la guerra; a medida que el FMLN ha dado golpes político-militares que evidencian quién está realmente ganando la guerra, este pacto ha entrado en crisis, y sólo por la rápida intervención estadounidense, Duarte aún no ha sido desplazado por los militares de la Presidencia. Ver en el *Miami Herald* del 23 de enero de 1986 el artículo de Tim Golden, "Pérdida de apoyo militar limita la autoridad de Duarte", que es muy revelador respecto a la función de estos Gobiernos *democráticos*, creaturas de la administración estadounidense.
 - 24 Ver el reportaje "Necesario Restar Poder al Ejército, declara V. Cerezo", en *El Nuevo Diario*, 11 julio 1986.
 - 25 Sobre fuerzas policiales asociadas con el proyecto estadounidense, ver el trabajo que sobre Costa Rica, hicieron Jorge Vargas y Miguel Gutiérrez, próximo a publicarse en Cuadernos de Pensamiento Propio.
 - 26 Ver el trabajo de Jorge Vargas, "La Militarización y la Reestructuración Nacional de Costa Rica", en *Centroamérica: La Guerra de Baja Intensidad*, 117, notas 3 y 4. En mayo de 1986, el Ministro de Seguridad Pública del Gobierno del Presidente Arias Sánchez anunció la creación de un comando antiterrorista, con el apoyo de cinco instructores estadounidenses que ya se encuentran en el país. *La Nación*, 14 mayo 1986, pág. 10-A.